

Medellín, dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022)

Proceso	EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL
Radicado	05001 31 03 017 2014 00268 01
Demandante	MARIELA INÉS GARCÍA RAMÍREZ
Demandado	HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARTA LIGIA ÁLVAREZ ZAPATA
Juzgado Origen	OCTAVO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

En atención al memorial presentado por la curadora ad litem de los herederos determinados de la señora Marta Ligia Álvarez Zapata, quien manifiesta que se cumplió el término para dictar sentencia de segunda instancia, según lo establecido en el artículo 121 del CGP, se pone de presente que, según las sentencias T-341 de 2018 y C-443 de 2019 de la Corte Constitucional, las previsiones del artículo en mención, se aplican ante la falta de decisión en término razonable, sin embargo, no implican nulidad de pleno derecho y tampoco la pérdida automática de competencia.

Sea pertinente destacar que, el despacho recibió múltiples asuntos pendientes por digitalizar y decidir, en el preciso momento en que se reanudaron los términos judiciales suspendidos por la emergencia sanitaria lo que implicó el recibo de considerable volumen de asuntos adicionales, con cambios en la conformación del equipo de trabajo y sin procesos, procedimientos, ni archivo histórico.

A lo anterior se agregaron acontecimientos de índole familiar del equipo de trabajo que, aunadas a la compleja necesidad de desarrollar el trabajo en casa, al nombramiento del suscrito como presidente de la Sala Civil en el año inmediatamente anterior y el cambio de sala de decisión por reorganización, han dificultado el ejercicio de las funciones en condiciones normales y explica que a la fecha no se haya proferido la decisión correspondiente.

Sin embargo, el despacho no es indiferente a la necesidad de atender los requerimientos del servicio, para ello ha adoptado las medidas de organización y fortalecimiento del equipo de trabajo, está comprometido

para resolver con prontitud los asuntos a cargo e incluso por ello se han implementado medidas para la mejoría en la capacidad de respuesta de los asuntos a cargo.

En consecuencia, la falta de decisión se encuentra justificada, este despacho conserva competencia para resolver y la providencia que desate la segunda instancia se proferirá en término razonable bajo las condiciones expuestas.

Frente a la solicitud de celeridad, es necesario indicar que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece el orden en que deben proferirse las sentencias, señalando expresamente lo siguiente: *"Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal."*, recalcando seguidamente, que la alteración de este orden constiutirá falta disciplinaria.

Así las cosas, no advierte el Despacho que el asunto sometido a consideración de la segunda instancia tenga prelación legal, asunto que tampoco afirmó la parte interesada, razón por la cual, no encuentra el despacho motivo legal para que deba proferirse sentencia de manera prioritaria en desmedro de los procesos que han ingresado con antelación para fallo, y en tal sentido se negará la solicitud.

De otro lado, encuentra el Despacho que de la sustentación del recurso de apelación no se corrió traslado, conforme lo establece el artículo 14 del Decreto 806 de 2020¹, por lo que se ordenará lo pertinente a la Secretaría de la Corporación.

Finalmente, se requiere a la curadora ad litem para que aclare la solicitud consistente en que se informe sobre una presunta tutela que se remitió a la Corte Constitucional, puesto que, no se evidencia tal suceso en las

¹ Adoptada como legislación permanente en la Ley 2213 de 2012; en lo pertinente, permanece el trámite de apelación de sentencias en materia civil (art. 12).

actuaciones surtidas en esta instancia; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art. 43 del CGP.

Por lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: ADVERTIR que el Despacho conserva competencia para resolver y que el fallo se proferirá en orden, sin que este asunto tenga prelación legal.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría correr traslado de la sustención del recurso de apelación por el término de cinco días.

TERCERO: REQUERIR a la curadora ad litem para que aclare la solicitud consistente en que se informe sobre una presunta tutela que se remitió a la Corte Constitucional, toda vez, no se evidencia tal suceso en las actuaciones surtidas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado